

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

**Medellín, cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por DIANA PATRICIA BEJARANO VELÁSQUEZ en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A. (Radicado 05001-31-05-001-2019-00050-01).

### ANTECEDENTES

La demandante pretende la declaratoria por vía judicial del derecho que le asiste a la pensión de invalidez con aplicación de las prerrogativas contenidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en coherencia con la postura jurisprudencia de la capacidad residual, los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

Como sustento de lo anterior, comentó que nació el 09 de enero de 1972 contando actualmente con 47 años de edad; que efectuó cotizaciones a Protección S.A. durante toda su vida laboral entre el 10 de abril del 2000 y el 30 de diciembre de 2017; que padece “depresión psicótica”, enfermedad degenerativa y progresiva, siendo diagnosticada con TAB desde sus 15 años, perdiendo la funcionalidad laboral desde el año 2007; que Suramericana el

18 de abril de 2013 calificó su pérdida de capacidad en un 50.20% con fecha de estructuración 09 de junio de 2008, catalogando el origen como común; que por comunicación del 20 de diciembre de 2013 Protección negó el reconocimiento de la pensión de invalidez por no acreditar 50 semanas dentro de los tres años anteriores al estado y aunque es eso cierto, aduce que si cuenta con 71.42 semanas entre el 18 de abril de 2010 y el 18 de abril de 2013 - fecha en que se efectuó el dictamen ocupacional-.

PROTECCIÓN S.A. allegó respuesta al libelo donde señaló no ser de su conocimiento la mayoría de los hechos expuestos aceptando la calificación de pérdida de capacidad laboral y la negativa de la prestación, pero con oposición a lo pedido, en tanto aduce no ser esta la oportunidad para contradecir la fecha de estructuración definida en el dictamen frente a la cual no agotaron los recursos, además de afirmar que su diagnóstico no tiene el carácter de enfermedad degenerativa. Como medios exceptivos propuso los de mérito que denominó inexistencia de obligación alguna frente a Protección S.A, plena validez de los dictámenes emitidos - inexistencia de la declaratoria de nulidad, la calificación de la invalidez es una competencia otorgada por la ley exclusivamente para las Juntas de Calificación, debe haber un grupo interdisciplinario exigido legalmente para calificar la pérdida de capacidad laboral, no se ha agotado el procedimiento legal para controvertir el dictamen, finalidad del acceso a la jurisdicción ordinaria como mecanismo para controvertir el dictamen de la Junta nacional variación de la condición clínica de la paciente con posterioridad al dictamen de la Comisión Médico laboral de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A no puede afectar a Protección S.A, improcedencia de la prestación solicitada, exequibilidad del requisito de 50 semanas, no cobertura del seguro previsional para la financiación de la pensión de invalidez, la enfermedad que padece la demandante científica y médicamente no se establece como degenerativa, no existe fundamento lógico, legal ni fáctico para establecer que la fecha de estructuración sea la fecha solicitada por la demandante, inexistencia de mora durante la afiliación al Sistema de Seguridad Social en pensiones, inexistencia de las obligaciones demandadas, inexistencia de mora cuando no se acreditan los requisitos exigidos en la ley para el reconocimiento de

una prestación económica, falta de causa para demandar, buena fe, prescripción y pago y compensación.

El Juzgado de Conocimiento que lo es el Primero Laboral del Circuito de Medellín en sentencia que profirió el 10 de mayo de 2022, DECLARÓ probadas las excepciones de inexistencia de obligación y plena validez de los dictámenes emitidos. ABSOLVIÓ a Protección S.A. de todas las pretensiones de la demanda y CONDENÓ en costas a la demandante, fijando las agencias en derecho en la suma de \$1.000.000.

El representante judicial de la demandante acudió al recurso de apelación solicitando la revocatoria de lo decidido toda vez que no comparte la valoración probatoria y en ese orden, pide un estudio efectivo del testimonio rendido por Viviana María Restrepo que no fue tachado, de donde claramente se puede concluir que las complicaciones para el desempeño de labores aparecieron entre los años 2013 y 2015, pudiendo evidenciarse además del dictamen emitido por Suramericana que para abril de 2013 estaba desempeñándose laboralmente y es desde tal anualidad que la enfermedad le impidió seguir ejecutando su actividad, considerando viable dar cabida a lo pedido partiendo de la data en que se emitió el dictamen de pérdida de capacidad laboral.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### **CONSIDERACIONES**

La Corporación restringirá su estudio al punto objeto de apelación planteado por el impugnante, al tenor de las directrices procesales que dictan las normas que regulan el asunto, y que en síntesis apunta a dar por acreditado que la actora tiene derecho a la pensión de invalidez en el sendero de la tesis de la capacidad residual.

Previo a resolver lo que corresponde, importa resaltar que en el presente evento, se encuentra por fuera de discusión la condición de inválida de la demandante bajo los presupuestos del artículo 38 de la Ley 100 de 1993, en virtud a la calificación que fue realizada por Suramericana, entidad que otorgó un 50.20% de PCL, con fecha de estructuración del 09 de junio de 2008 (Págs. 22-29 Archivo 01-02); y que en la afiliación a Protección S.A. se dio lugar a la cotización de 39 días que equivalen a 5.58 semanas una semana dentro de los tres años previos a la estructuración del estado (Págs. 31-33 Archivo 11-02), con las cuales no alcanza los requisitos enlistados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, aplicable en virtud de ser la normatividad vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada -teoría del hecho causante-.

Lo anterior, pone en evidencia, que el debate se centra en establecer si hay lugar a tener en cuenta las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración, para el reconocimiento de la pensión de invalidez bajo la postura jurisprudencial relativa a la capacidad residual, y en caso positivo determinar las condiciones a partir de las cuales procede el pago de la prestación.

Sobre esa materia, el criterio reiterado de la alta corporación en nuestra especialidad es por regla general, que *“el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de la invalidez”* (CSJ SL409-2020, SL2204-2019 y SL938-2019), lo que denota la imperatividad en probar no solo la condición de invalidez, sino la cotización de 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral ha planteado una excepción a la regla general para los eventos en que la pérdida de la capacidad laboral proviene de una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, variando su postura respecto del momento a partir del cual se contabiliza el número de cotizaciones y, por lo tanto señalando que *“la prudencia obliga a analizar las particularidades de cada caso a efecto de*

*conceder u otorgar oportunamente las prestaciones económicas y de salud necesarias para la recuperación del afiliado y/o su subsistencia” (CSJ SL472-2020).*

Así, la Alta Corporación insistentemente ha previsto para estos padecimientos crónicos, congénitos y progresivos que, el parámetro para determinar la asunción de los presupuestos legales es distinto, en tanto el padecimiento ocasiona que la fuerza laboral se mengüe con el tiempo y, por lo tanto, le permite a la persona trabajar hasta tanto el nivel de afectación sea de tal magnitud que le impida, de manera cierta, llevar a cabo una labor. Esa excepción se justifica entonces en que de tomar como fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral el momento en el que se presentó el accidente, primer síntoma o la fecha del diagnóstico, desconoce que, pese a las condiciones de la enfermedad, la persona pudo desempeñar una labor y, en esa medida, desechar las semanas aportadas con posterioridad al momento asignado en la calificación, lo que implicaría asumir que las personas en situación de discapacidad, en razón de su estado de salud, no pueden ejercer una profesión u oficio que les permita garantizarse una vida en condiciones de dignidad (Ver SL3275-2019, SL5470-2021 y SL913-2022)., por lo que debe auscultarse la fecha más cercana a la fijada por los calificadores, en la que se verifique que efectivamente se llegó a la condición de invalidez en forma permanente y definitiva (Ver SL4178-2020).

En ese rumbo, es dable tener en cuenta no solo la fecha en que se estructura la invalidez (regla general), sino también *“(i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional, o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando”*. (CSJ SL3275-2019, SL4567-2019, SL4178-2020, SL4346-2020, SL1002-2020, SI5023-2021, SL2194-2022, entre otras)

En este asunto, según se extrae de la experticia de pérdida de capacidad laboral (Págs. 22-29 Archivo 01-02), lo que muestra el historial clínico aportado (Págs. 4-21 y 38 Archivo 01-02), y la información recopilada por la Comisión Laboral de Suramericana (Págs. 30-34 Archivo 01-06 y págs. 1-

Archivo 01-07), es que la demandante se encuentra diagnosticada con “*TAB con síntomas psicóticos, episodio mixto*”, resultando el primero de los hallazgos desde los 15 años de edad, siendo atendida en SAMEIN desde diciembre de 1998, y tratada farmacológicamente, manejo que fue establecido como crónico e indefinido, generando de 10 a 15 hospitalizaciones por episodios psicóticos, 5 intentos suicidas, y múltiples incapacidades entre los años 2007 y 2017 (Págs. 36-37 y 42-43 Archivo 01-02) con antecedentes familiares de TAB -progenitor y tíos-, cuyos síntomas concretos y evidentes iniciaron por muerte de hijo en el año 1996 y se agudizaron por deceso de la madre ocurrido en 2012.

Con miras a realizar una labor exhaustiva de verificación de las condiciones que provocaron la invalidez de la afiliada a fin de establecer con la mayor exactitud posible la enfermedad que dio lugar a la invalidez conforme a los argumentos de la alzada y a la invitación que en providencias como la SL4178-2020 se ha pregonado, se tiene que según concepto emitido por el médico laboral Jaime Álvarez y que fue aportado por la activa (Pág. 41 Archivo 01-02), la enfermedad de la accionante es de curso degenerativo, evidenciándose del concepto de rehabilitación integral emitido el 22 de marzo de 2012, y que igualmente quedó consignado en el informe de Medicina Laboral de Suramericana, que se está ante una enfermedad de tipo crónico (Pág. 23 y 34 Archivo 01-02).

A ese efecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado que las enfermedades de tipo crónico son de larga duración y progresión generalmente lenta, y se catalogan como una patología para la cual “*aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un estado funcional, mediante el consumo constante de fármacos*” (Ver SL2772-2021), encajando en este grupo la enfermedad de la promotora del juicio por disposición de los profesionales de la salud conocedores de los tratamientos y su evolución, donde se ha dado un proceso de deterioro y de difícil estabilización (Pág. 18 Archivo 01-07), y el tratamiento farmacológico es indefinido, lo que da cuenta

de su persistencia al requerir manejo durante años o decenios y contar con períodos de latencia largos, evolución prolongada y relativa incurabilidad.

Es entonces posible de cara a la naturaleza del padecimiento de la señora Bejarano, dar análisis a la posibilidad de contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la calenda de estructuración - 09 de junio de 2008-, encontrando que esta data según la experticia se remonta a la primera hospitalización por psiquiatría (Pág. 25 Archivo 01-02), época en la que se desempeñaba como auxiliar contable y efectuaba cotizaciones al Sistema de pensiones como trabajadora dependiente (Págs. 31-33 Archivo 11-02).

Pero es que en el estudio de las circunstancias que rodearon su oficio y sus aportes al Sistema son de relevancia para la definición de lo debatido, en tanto quien figura como parte patronal es la señora Viviana María Restrepo Angarita que se hizo presente en este trámite como testigo, explicando que Diana Patricia es su cuñada y que desde el año 2000 le ha colaborado en actividades de contabilidad que ha prestado a diferentes empresas primero sin continuidad y luego por medio de un contrato a término indefinido, relatando que aunque cumplía sus funciones se tardaba más de lo previsto ejemplificando que un proceso de dos días, duraba en la actora ocho días, que desde el año 2009 empezó a faltarle la memoria y le daba dificultad el pensamiento, por lo que se optó por tiempos dejarla inactiva pero con continuidad en las cotizaciones a efectos de no dejar perder todos sus derechos y que permitirle alcanzar una pensión de vejez, señalando como picos altos de la enfermedad los años 2008, 2009, y 2013, con la precisión de presentarse a laborar 3 o 4 días del mes porque no le daba su capacidad, y que hubo un tiempo en que no podía salir de la casa por lo que debió enviársele un computador a su lugar de residencia para el desempeño de lo contratado, y los archivos a los que le correspondía dar orden, equipo que fue destruido, y la documental revuelta, maltratada y rayada. Expuso que las tareas atribuidas las pudo ejecutar hasta 2013 o 2015 cuando clínicamente le fue imposible continuar por el grado de agresión y hospitalizaciones de hasta un mes.

Lo anterior da cuenta que en el marco de la capacidad productiva de la señora Bejarano, no puede entenderse que como lo sugiere la convocante se haya disminuido en la magnitud requerida para el año 2013, pues lo que las probanzas muestran es que desde el año 2008 cuenta con ostensibles dificultades para desempeñarse en un ámbito de tipo laboral, lo que fue posible incluso con intermitencia por tratarse de una familiar - cuñada- cuya pareja - hermano mayor de la demandante- era el que velaba por el bienestar personal y económico de Diana Patricia, y propendía en voces de la declarante por mantenerla ocupada, pero se hacen ostensibles las dificultades y complicaciones que su estado de salud le generaba para la efectividad en un oficio remunerado, que de no ser por el lazo consanguíneo que impulsó la contratación, difícilmente dado el panorama de su comportamiento, su enfermedad le hubiera permitido permanecer en otro cargo bajo sujeción patronal, siendo trascendental acotar que no es posible concebir que la autoagresión - contra uno mismo- y heteroagresión -contra otros- presentada, las apariciones delirantes, síntomas psicóticos y depresivos, la pérdida de memoria, la dificultad para realizar cálculos matemáticos, el miedo a salir a la calle, la desorientación en el espacio, el aislamiento social y el bajo rendimiento en su trabajo que registran desde el año 2008, la hubieran habilitado para en uso de su fuerza productiva tener la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana pese a su condición, que es el objeto de la excepción asentada jurisprudencialmente, porque de hecho la economía familiar estaba a cargo de sus hermanos sin colaboración de la afectada de manera constante.

De ese modo, el solo hecho de existir cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración en el particular, no se da cabida a la alteración de la fecha de estructuración de invalidez definida por la autoridad médica competente, visualizando esta Sala que las semanas con cotización hasta el año 2022 no tienen por fuente estricta el ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual de la interesada, sino que ello tuvo por razón el acogimiento y apoyo de sus familiares incluso desde el año 2008 para evitar su desprotección futura en el aspecto pensional dada su situación patológica, y



a que sus necesidades y las de su hija pasaron a estar de cargo de aquellos, circunstancia que explica que dentro de los vestigios se observe que la demandante para diferentes épocas entre el 2010 y 2013 anunciaba su condición de “*ama de casa*”, “*desvinculada*” y “*desempleada*”, por lo que de ser tenidos en cuenta esos tiempos con ausencia de una relación contractual, conllevaría a un fraude al sistema general de pensiones que a su vez degrada su sostenibilidad fiscal y contraría los fines del estado social de derecho que se buscan cubrir.

Así, surge evidente que no es dable impartir la conclusión referida a que el padecimiento se manifestó de manera evidente y contundente para definir la posibilidad de desempeñarse laboralmente desde el momento en que se emitió el dictamen -18 de abril de 2013- por ser desde allí que se cumple con el requisito de semanas, o para cuando se procedió a elevar la reclamación de la prestación - 20 de diciembre de 2012- (Pág. 39 archivo 01-02), pues son eventos ocurridos con posterioridad a la fecha en la que la actora desde tiempo atrás había agotado su posibilidad de desempeñarse en un oficio, y mucho menos, puede ello derivarse de la última cotización, por no entenderse hechas las correspondientes al lapso del 2008 al 2022 con uso de su capacidad residual, apreciando por el contrario, una limitación para su actividad diaria y laboral que en el contexto temporal no permite apartarse del examen ocupacional y atribuir a un momento previo, la efectiva merma de capacidad laboral.

Las anteriores reflexiones conllevan a que el conteo de las semanas legalmente exigidas principie el 09 de junio de 2008, como fue definido por la entidad calificadora, con lo que se derruyen los argumentos de la activa para acceder a la prestación bajo la teoría planteada, deviniendo en necesario confirmar la decisión objeto de estudio, que impuso la absolución de Protección S.A de las pretensiones promovidas en su contra.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 365-1 del CGP, las costas en la instancia estarán a cargo de la demandante, fijándose por agencias en derecho en esta sede en la suma de medio SMLMV.

**DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA**, la sentencia objeto de apelación de fecha y procedencia conocidas.

Costas de la instancia a cargo de la parte demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de medio SMLMV.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ).

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
SIN FIRMA POR PERMISO AUTORIZADO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310500120190005001  
**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** DIANA PATRICIA BEJARANO VELASQUEZ  
**Demandado:** A.F.P. PROTECCION S.A.  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 4/05/2023  
**Decisión:** CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 5/05/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario